

Interés colectivo de las mujeres a no ser discriminadas.

El interés jurídico es un requisito vital para la procedencia de un medio de impugnación, y se acredita cuando quien acude a la justicia resultó afectado directamente por el acto o resolución de la autoridad. El interés difuso permite la procedencia de reclamos de la ciudadanía cuando argumente pertenecer a un grupo afectado de manera colectiva, aunque aparente o formalmente no se afecte a cada uno de sus integrantes.

En materia electoral, se ha reconocido el interés difuso a partidos políticos y a los integrantes de comunidades indígenas, pero no son los únicos casos en que se ha acreditado la personería de una persona o colectivo para dichos efectos.

Tal es el caso del SX-JDC-521/2016. El Tribunal Electoral de Veracruz revocó los Lineamientos para Garantizar el cumplimiento de la Paridad de Género en el Registro de Candidatos emitidos por el OPLE y, ante el miedo de las militantes para impugnar, diversas mujeres impugnaron su sentencia, argumentando la omisión de perspectiva de género de los Magistrados ante el contexto de la violencia de género en el Estado, y que el OPLE no había sobrepasado sus atribuciones al implementar los bloques de rentabilidad, ya que la obligación del artículo 3 párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos entró en vigor desde 2014.

La Sala Regional acogió el reclamo de las actoras, a pesar de no ser precandidatas o candidatas de un partido político, reconociéndolas como integrantes del grupo “difuso” de mujeres afectadas por la discriminación en materia política, últimas beneficiarias del objeto de los lineamientos: garantizar la igualdad sustantiva entre géneros, mediante condiciones de participación política equitativa, prohibiendo que sólo uno de los géneros fuera postulado en aquellos distritos y municipios en que hubiere obtenido un partido político los más altos o más porcentajes de votación en la elección anterior.